

Entre cifras y certezas

El último informe del Faro UDD titulada: “Inseguridad en la Macrozona Sur y su impacto en la industria forestal” vuelve a instalar un debate que, lejos de cerrarse, se ha vuelto cada vez más complejo: el impacto de la violencia en la Macrozona Sur y sus efectos sobre la industria forestal. Las cifras son elocuentes y, en muchos casos, preocupantes. Sin embargo, también invitan a una lectura más amplia, que considere no solo los datos, sino también las múltiples miradas que conviven en un territorio tensionado por años de conflicto.

Por un lado, el diagnóstico del estudio apunta a una realidad difícil de ignorar. La acumulación de hechos violentos —629 ataques incendiarios en cinco años, con pérdidas millonarias— no solo ha afectado infraestructura, sino que ha erosionado la confianza, la inversión y el empleo en una de las principales actividades productivas de nuestra región. La caída en la producción, el cierre de aserraderos y la disminución del empleo son señales claras de un sector que enfrenta un escenario adverso, donde la incertidumbre se ha vuelto parte de la rutina.

A ello se suma un elemento institucional que el propio informe releva: la baja efectividad del sistema judicial frente a la violencia rural. Con niveles mínimos de formalización y condena, se instala la percepción de impunidad, debilitando aún más la capacidad del Estado para garantizar el orden. En este contexto, la prolongación del Estado de Excepción —que ya suma varios años— abre legítimas interrogantes sobre su eficacia como herramienta de solución y no solo de contención.

Pero sería un error reducir el problema a una sola dimensión. Tal como advierten actores del propio sector, la crisis que atraviesa la Macrozona Sur no puede explicarse únicamente por la violencia. Factores económicos globales, como la desaceleración de mercados clave, también han incidido en la caída de la actividad forestal. Además, algunos gremios plantean que las cifras, si bien relevantes, no logran capturar la experiencia cotidiana de quienes trabajan en terreno, donde la inseguridad se traduce en decisiones concretas: restringir horarios, evitar zonas o incluso abandonar actividades productivas. Otros, en tanto, advierten que insistir únicamente en medidas de seguridad sin avanzar en soluciones políticas de largo plazo solo perpetúa un estado de tensión controlada, pero no resuelta.

La Macrozona Sur no requiere solo más o menos presencia policial, ni tampoco únicamente políticas de desarrollo económico. Lo que está en juego es la capacidad del Estado —y del sistema político en su conjunto— de articular una respuesta que combine seguridad, justicia y oportunidades.

El informe del Faro UDD aporta antecedentes valiosos para dimensionar el problema, pero también deja en evidencia que ninguna mirada, por sí sola, logra abarcar su complejidad. En ese equilibrio de posturas se encuentra, precisamente, la clave para avanzar, porque más allá de los indicadores, lo que está en juego es la vida cotidiana de miles de personas que, entre la incertidumbre y la resiliencia, siguen esperando certezas.